

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 588

24 de agosto de 2026

Presentada por el señor *Molina Pérez*

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la *Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos* del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre los contratos de gerencia, administración, ingeniería, supervisión y ejecución vinculados al Programa de Mejoras Capitales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico; examinar el costo, alcance, enmiendas, desempeño, resultados y retorno de inversión de los principales gerentes de programa y contratistas; evaluar los mecanismos de contratación, fiscalización, facturación, supervisión y auditoría utilizados por la Autoridad; investigar la relación entre los recursos destinados a servicios de gerencia y el progreso físico y financiero de las obras; evaluar los controles aplicables a subcontratistas y subconsultores; examinar el cumplimiento con las leyes, reglamentos, requisitos federales y condiciones aplicables a fondos de FEMA, CDBG-DR y otras fuentes de financiamiento; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) enfrenta uno de los mayores retos de infraestructura pública en la historia reciente de Puerto Rico. El deterioro acumulado de sus instalaciones, la necesidad de modernizar plantas de tratamiento y sistemas de distribución, el rezago en mantenimiento preventivo y los daños ocasionados por huracanes, terremotos y otros eventos naturales han aumentado significativamente la necesidad de inversión para garantizar la continuidad,

confiabilidad y resiliencia del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. El propio Gobierno de Puerto Rico ha reconocido la existencia de deficiencias de infraestructura y mantenimiento, así como la necesidad de acelerar proyectos de mejoras capitales para estabilizar el sistema.

La infraestructura bajo la responsabilidad de la AAA comprende plantas de filtración y tratamiento de aguas usadas, estaciones de bombeo, embalses, sistemas de distribución, líneas de transmisión, sistemas de alcantarillado sanitario, instalaciones eléctricas y otros componentes esenciales para el funcionamiento de comunidades, hospitales, escuelas, comercios, industrias y demás actividades económicas. Los huracanes Irma y María agravaron significativamente las deficiencias existentes y, posteriormente, los terremotos, otros eventos atmosféricos, el aumento en los costos de construcción y otras circunstancias incrementaron aún más la necesidad de inversión pública.

Como respuesta a estas necesidades, la AAA ha desarrollado un Programa de Mejoras Capitales (PMC) de gran magnitud, financiado mediante una combinación de recursos propios, financiamiento, fondos federales de recuperación y otras fuentes. La ejecución de este programa requiere coordinar múltiples etapas, incluyendo planificación, ingeniería, adquisición de terrenos, permisos, cumplimiento ambiental y reglamentario, diseño, contratación, construcción, supervisión, administración de contratos, pruebas, puesta en operación y cierre de proyectos.

Ante la complejidad y magnitud del PMC, la AAA ha recurrido a empresas privadas especializadas en Administración de Programa, Ingeniería y Construcción para administrar y apoyar la ejecución de estas funciones. Entre los principales gerentes del programa se encuentran Black & Veatch Puerto Rico; Jacobs Caribe Engineers, P.S.C.; Arcadis Caribe; CSA Architects & Engineers, LLP; Acciona Agua Puerto Rico LLC y AB Agua Puerto Rico LLC.

La magnitud económica alcanzada por estos contratos hace necesaria una evaluación legislativa de su costo, evolución y resultados. De acuerdo con los

documentos contractuales y registros públicos examinados, los cuatro contratos han experimentado aumentos sustanciales con respecto a sus cuantías originales. Black & Veatch pasó de tener un contrato de aproximadamente \$9.02 millones a tener uno de \$183.33 millones, después de las enmiendas -un incremento de aproximadamente 1,932%; Jacobs aumentó de aproximadamente \$554 mil a \$179.1 millones, un incremento cercano al 32,300%; CSA aumentó de aproximadamente \$10.3 millones a \$159.9 millones, equivalente a aproximadamente 1,452%; mientras que Arcadis aumentó de aproximadamente \$5.2 millones a \$131.8 millones, equivalente a aproximadamente 2,435%.

En conjunto, los máximos contractuales reportados para estas cuatro entidades alcanzan aproximadamente \$654.1 millones, según el siguiente desglose:

Contratista	Contrato Original	Máximo Contractual Reportado	Incremento %
Black & Veatch	\$9.02M	\$183.3M	1,932%
Jacobs	\$0.55M	\$179.1M	32,300%
CSA	\$10.3M	\$159.9M	1,452%
Arcadis	\$5.2M	\$131.8M	2,435%
AB Agua PR	\$136.8M	\$137.8M	1.88%
Acciona Agua PR	\$152.1M	Recién adjudicado	N/A

Estas cantidades representan techos o máximos contractuales reportados y no necesariamente desembolsos efectivos. La existencia de un máximo contractual no significa que la totalidad de dicha cantidad haya sido obligada, facturada o pagada. Precisamente por ello, resulta necesario que la Asamblea Legislativa pueda establecer con precisión la diferencia entre el máximo contractual autorizado, las obligaciones

efectivamente contraídas, las cantidades facturadas, los desembolsos realizados y los resultados concretos obtenidos.

En el caso de la rehabilitación de la planta de tratamiento Enrique Ortega en Toa Alta, resulta necesario examinar una aparente discrepancia documental relacionada con la identidad jurídica de la entidad contratada. Según la información examinada, el contrato fue otorgado a Acciona Agua Puerto Rico LLC el 15 de febrero de 2024, mientras que se identifica el 6 de septiembre de 2024 como la fecha de formación de dicha entidad en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Asimismo, en el contrato se habría utilizado el número de registro correspondiente a AB Agua Puerto Rico LLC, cuya fecha de formación se identifica como el 2 de agosto de 2022.

Los registros oficiales de contratos de la AAA confirman, además, la magnitud de estas relaciones contractuales. Por ejemplo, el Informe de Contratos Vigentes de la Autoridad para la Transición Gubernamental de 2024 identificó contratos de gerencia de proyectos por aproximadamente \$125.3 millones para Black & Veatch, \$118.9 millones para Jacobs y \$92.6 millones para Arcadis, reflejando que estas relaciones contractuales se han extendido en el tiempo y representan compromisos fiscales de considerable magnitud.

La AAA ha sostenido que las sucesivas enmiendas responden a la incorporación de proyectos adicionales, la ampliación del alcance de los servicios y la necesidad de garantizar la continuidad de la administración de proyectos que atraviesan múltiples etapas, desde la planificación y el diseño hasta la construcción y puesta en operación.

Es necesario conocer qué servicios, proyectos y responsabilidades fueron incorporados con cada modificación, cuál fue su justificación, cuánto se comprometió, cuánto se facturó, cuánto se pagó y qué resultados produjo cada aumento.

La magnitud de esta inversión pública exige que la ejecución del PMC pueda evaluarse mediante indicadores objetivos de desempeño. La Asamblea Legislativa debe poder determinar cuántos proyectos han sido completados, cuántos permanecen en

planificación, diseño o construcción, cuáles han sufrido atrasos, qué órdenes de cambio han sido emitidas, cuáles han generado aumentos de costos y, finalmente, cuánta infraestructura nueva o rehabilitada ha sido efectivamente puesta en servicio.

Asimismo, resulta necesario examinar los mecanismos utilizados por la AAA para verificar las horas trabajadas, tarifas profesionales, gastos reembolsables, costos de subconsultores y subcontratistas, servicios facturados y demás componentes de las facturas presentadas bajo estos contratos. La fiscalización debe permitir establecer una relación verificable entre los recursos públicos invertidos, los servicios efectivamente prestados y los resultados obtenidos.

Esta evaluación adquiere particular importancia ante la condición actual del sistema de agua potable y alcantarillado de Puerto Rico. La necesidad de continuar rehabilitando infraestructura crítica y atender deficiencias de mantenimiento demuestra que el éxito del PMC no puede medirse únicamente por la cantidad de fondos asignados, contratos suscritos o servicios administrativos prestados. Debe medirse por la capacidad de transformar esos recursos en plantas rehabilitadas, sistemas modernizados, capacidad operacional recuperada, infraestructura resiliente y un servicio de agua más confiable para la ciudadanía.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del
- 2 Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los contratos,
- 3 enmiendas, servicios, desembolsos, desempeño y resultados relacionados con la gerencia,
- 4 administración, ingeniería, diseño, supervisión y ejecución del Programa de Mejoras
- 5 Capitales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.
- 6 Sección 2.- La investigación comprenderá, sin que se entienda como una limitación,
- 7 los contratos y relaciones contractuales de Black & Veatch Puerto Rico, PSC; Jacobs Caribe

1 Engineers; Arcadis Caribe; CSA Architects & Engineers, LLP; AB Agua Puerto Rico, LLC;
2 Acciona Agua Puerto Rico, LLC; y cualquier otra entidad que desempeñe funciones de
3 gerencia de programa, ingeniería, diseño, construcción, supervisión, administración
4 contractual, operación o mantenimiento relacionadas con el Programa de Mejoras
5 Capitales.

6 Sección 3.- Como parte de la investigación, la Comisión examinará la evolución de
7 cada contrato desde su adjudicación original hasta su término o vigencia actual,
8 incluyendo el monto original, cada enmienda aprobada, la fecha y cuantía de cada
9 modificación, la modificación del alcance de los servicios, los proyectos incorporados o
10 eliminados, la justificación presentada para cada modificación, el término de vigencia, el
11 máximo contractual vigente, las obligaciones contraídas, las cantidades facturadas, los
12 desembolsos realizados y los resultados asociados.

13 Sección 4.- La Comisión investigará la relación entre los recursos destinados a los
14 servicios de gerencia y administración del Programa de Mejoras Capitales y el progreso
15 físico y financiero de los proyectos. A tales efectos, deberá identificar -como mínimo- los
16 proyectos completados y los que se encuentren en las etapas de construcción, de diseño,
17 de planificación o de adquisición, los atrasados, los cancelados o los reprogramados; el
18 costo original y actual de cada proyecto; el calendario original y vigente; el porcentaje de
19 avance físico y financiero; las órdenes de cambio; las reclamaciones contractuales; y la
20 fecha de entrada en operación de cada proyecto completado.

21 Sección 5.- La Comisión evaluará el retorno de inversión y la costo-efectividad de los
22 servicios de gerencia y administración mediante indicadores objetivos de desempeño;

1 incluyendo, entre otros, el costo de gerencia por dólar de construcción, costo de gerencia
2 por proyecto, porcentaje de proyectos completados, desviaciones de calendario,
3 desviaciones presupuestarias, órdenes de cambio, aumentos de costo atribuibles a errores
4 u omisiones de diseño, reclamaciones y litigios, tiempo transcurrido entre diseño,
5 contratación y construcción, infraestructura efectivamente puesta en operación y
6 cualquier otro indicador que permita determinar el valor producido por los servicios
7 contratados

8 Sección 6.- La Comisión rendirá un informe parcial en un término no mayor a noventa
9 (60) días luego de ser asignada esta resolución y un informe final con sus hallazgos,
10 conclusiones y recomendaciones antes de que se termine la Cuarta Sesión Ordinaria de
11 la Vigésima Asamblea Legislativa, con el fin de proponer acciones correctivas, legislativas
12 o administrativas que respondan a las necesidades identificadas.

13 Sección 7.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios y testigos;
14 requerir información, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares, a los fines
15 de cumplir con el mandato de esta resolución investigativa.

16 Sección 8.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su
17 aprobación.